INE/CG574/2023

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/BATR/JD06/COAH/69/2022

DENUNCIANTE: BRIZA ARLENE TREJO RÍOS

DENUNCIADO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE

MÉXICO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/BATR/JD06/COAH/69/2022, INICIADO CON MOTIVO DE UNA DENUNCIA PRESENTADA POR BRIZA ARLENE TREJO RÍOS, EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR LA PRESUNTA VULNERACIÓN A SU DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN, ASÍ COMO EL SUPUESTO USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES PARA TAL FIN

Ciudad de México, 26 de octubre de dos mil veintitrés.

	GLOSARIO		
Comisión de Quejas	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral		
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral		
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos		
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral		
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores		
INE	Instituto Nacional Electoral		
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales		
LGPP	Ley General de Partidos Políticos		
PVEM o denunciado	Partido Verde Ecologista de México		

GLOSARIO				
Quejosa o denunciante	Briza Arlene Trejo Ríos			
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral			
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación			
Tribunal Electoral	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación			
UTCE o Unidad Técnica	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral			

ANTECECENTES

1. **DENUNCIA.** Mediante acuerdo de cinco de febrero de dos mil veintiuno¹, la UTCE tuvo por recibido el oficio INE/COAH/JDE06/VE/938/2020, por medio del cual el Vocal Ejecutivo de la 06 Junta Distrital Electoral de este Instituto en el estado de Coahuila, remitió el escrito de queja signado Briza Arlene Trejo Ríos², denunciando la supuesta vulneración a su derecho de libre afiliación y la probable utilización de sus datos personales para tal fin, lo que dio lugar a la integración del cuaderno de Antecedentes **UT/SCG/CA/BATR/JD06/COAH/65/2021**.

Lo anterior, a fin prevenir a la citada quejosa para que ratificara o no el escrito de queja, ya que fue presentado sin su firma autógrafa.

2. **DESAHOGO DE PREVENCIÓN.** Mediante escrito de nueve de febrero de dos mil veintiuno, Briza Arlene Trejo Ríos, dio cumplimiento a la prevención formulada, presentando un escrito de queja³ con su firma autógrafa por los hechos que dieron lugar al presente procedimiento.

Así, una vez que la citada quejosa dio cumplimiento a la prevención formulada y ante la existencia de indicios para instaurar un procedimiento sancionador, mediante auto de veintinueve de marzo del mismo año⁴, se cerró y archivo dicho

¹ Visible a fojas 08 a 16 del expediente.

² Visible a fojas 03 a 07 del expediente.

³ Visible a fojas 22 a 23 del expediente.

⁴ Visible a fojas 25 a 30 del expediente.

cuaderno de antecedentes y se ordenó la apertura de un procedimiento ordinario sancionador para dilucidar los hechos controvertidos.

3. ADMISIÓN Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós⁵, se instauró el presente procedimiento bajo el expediente citado al rubro; se admitió a trámite la queja respectiva y se ordenaron diversas diligencias a fin de esclarecer los hechos denunciados, entre ellas, la baja de la quejosa del padrón de militante del denunciado, así como requerimiento de información a la DEPPP respecto de la fecha en que Briza Arlene Trejo Ríos fue afiliada al PVEM y su baja respectiva; del mismo modo, se requirió al denunciado a efecto de que informara la fecha de afiliación y baja respectiva y proporcionara, en su caso, la cédula de afiliación para justificar su libre militancia.

Dichas diligencias fueron desahogadas como se muestra a continuación:

Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Respuesta
PVEM	INE-UT/07422/2022 ⁶ 31/08/2022	Oficio PVEM-NE-183/2022 ⁷ , de 05/09/2022, signado por el representante Suplente del PVEM ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
DEPPP	Sistema de Archivos Institucional (SAI) ⁸ 30/008/2022	Correo electrónico institucional ⁹ 01/09/2021

4. INSPECCIÓN AL SITIO WEB DEL PVEM Y PRÓRROGA DE PLAZO. Por proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós¹⁰, a fin de corroborar lo informado por la *DEPPP* y el partido denunciado, se ordenó la certificación del portal de internet de PVEM con la finalidad de verificar si el registro de la quejosa como militante de éste, había sido eliminado y/o cancelado.

El resultado de dicha diligencia se hizo constar en Acta Circunstanciada,¹¹ en la que se asentó que no se encontró registro alguno de ésta en dicho sitio web.

Asimismo, se concedió una prórroga de plazo al denunciado para que aportara medios de prueba respecto de la legal afiliación de la quejosa.

⁵ Visible a fojas 37 a 44 del expediente.

⁶ Visible a páginas 63 a 66 del expediente.

⁷ Visible a páginas 69 a 71 del expediente.

⁸ Visible a páginas 47 a 52 del expediente.

⁹ Visible a páginas 67 y 68 del expediente.

¹⁰ Visible a páginas 72 y 75 del expediente.

¹¹ Visible a páginas 78 a 80 del expediente.

5. EMPLAZAMIENTO. Mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós¹², al encontrarse acreditada la existencia del hecho infractor y la probable responsabilidad del denunciado, la UTCE emplazó al PVEM, con la totalidad de las constancias existentes en autos, a efecto de que garantizar su derecho de audiencia con relación a los hechos controvertidos.

Dicho proveído se diligenció de la manera siguiente:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
PVEM INE-UT/10256/2022 ¹³	Notificación ¹⁴ : 15/12/2022 Plazo para responder ¹⁵ : del 16 de diciembre de 2022 al 5 de enero de 2023	Escrito de 5/01/2023 ¹⁶ , signado por el representante de PVEM ante el Consejo General del INE, en el que expuso, medularmente, que no existe indebida afiliación de Briza Arlene Trejo Ríos al PVEM, debido a que otorgó su consentimiento y proporcionó sus datos personales para tal efecto, llenando el formato respectivo. Que la quejosa actualmente no se encuentra registrada en el padrón de sus militantes porque la dio de baja en cumplimiento a lo ordenado por la autoridad electoral, así como el acuerdo INE/CG33/2019.

6. ALEGATOS. Por acuerdo de seis de marzo de dos mil veintitrés,¹⁷ se ordenó poner los autos a la vista de las partes a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

Dicho proveído se diligenció en los términos siguientes:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo para formular alegatos	Respuesta
PVEM	Citatorio: 09/03/2023	Escrito de 17/03/2023 ²¹ ,
INE-UT/1651/2023 ¹⁸	Cédula: 10/03/2023 ¹⁹ se entendió con personal	signado por el representante
14/07/2023	del partido denunciado	suplente de PVEM, ante el
14/07/2023	Plazo: Del 13 al 17 de marzo de 2023 ²⁰ .	Consejo General del INE.

¹² Visible a páginas 90 a 94 del expediente.

¹³ Visible a página 95 del expediente.

¹⁴ Visible a páginas 96 a 101 del expediente.

¹⁵ Sin contar el lapso del 19 al 30 de diciembre por ser periodo vacacional, además de los sábados 17 y 31 de diciembre y domingo 18 de diciembre de dos mil veintidós y domingo 1 de enero de este año, por ser inhábiles.

¹⁶ Visible a páginas 102 a 114 del expediente.

¹⁷ Visible a páginas 115 a 118 del expediente.

¹⁸ Visible a página 121 del expediente.

¹⁹ Visible a páginas 124 del expediente.

²⁰ Sin contar el sábado 11 y domino 12 de marzo de 2023 por ser inhábiles

²¹ Visible a 128 a 138 del expediente.

Sujeto – Oficio	Sujeto – Oficio Notificación-Plazo para formular alegatos	
		Ratificó lo manifestado al
		contestar el emplazamiento.
	Cédula: 17/03/2023 ²²	
Briza Arlene Trejo Ríos	Se entendió con la quejosa	Sin respuesta
,	Plazo: Del 20 al 24 de marzo de 2023 ²³	·

- **7. VERIFICACIÓN DE ESTATUS REGISTRAL**. El cuatro de octubre de dos mil veintitrés, la *UTCE* realizó una verificación al Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos y corroboró que la quejosa fue dada de baja del padrón de militantes de PVEM, sin que hubiese sido reincorporada al mismo.
- **8. ELABORACIÓN DE PROYECTO.** En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución **correspondiente**, para que fuera sometido a la consideración de las integrantes de la *Comisión de Quejas*.
- 9. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. En su Quincuagésima Primera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el veinte de octubre de dos mil veintitrés, la Comisión de Quejas, analizó y aprobó el presente proyecto, por UNANIMIDAD de votos de sus integrantes y ordenó su remisión a este Consejo General para su aprobación definitiva, y

CONSIDERANDO

PRIMERO, COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias del *INE*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16,

²² Visible a páginas 104 del expediente.

²³ Sin contar el sábado 18 y domino 19 de marzo de 2023 por ser inhábiles

párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y), de la *LGPP*, con motivo de la probable transgresión al derecho de libre de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de PVEM, en perjuicio de la inconforme.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas a PVEM, derivado, esencialmente, por la vulneración al derecho de libertad afiliación y la utilización indebida de datos personales de la quejosa del presente procedimiento.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,²⁴ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de Briza Arlene Trejo Ríos al partido denunciado.

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO

1. Materia del procedimiento

Determinar si el PVEM conculcó el derecho de libre afiliación de Briza Arlene Trejo Ríos, en su vertiente positiva —indebida afiliación—, así como el supuesto uso indebido de sus datos personales para conseguir dicha finalidad.

2. Marco Normativo

A) Constitución, leyes y acuerdos

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.²⁵

²⁴

Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion juridiccional/sesion publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf
²⁵ Véase Tesis de Jurisprudencia 25/2002, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, Base I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución,* es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, Bases I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.²⁶

Así las cosas, el *Tribunal Electoral*, en la Tesis de Jurisprudencia 24/2022, de rubro *DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES*.²⁷ ha establecido, el contenido y alcances del Derecho de afiliación, de los que, en esencia, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral, además de la normativa estatutaria de cada partido político, en tanto una de las obligaciones que deben cumplir, en términos del artículo 25, párrafo 1, inciso e) de la LGPP, estriba en *cumplir sus normas de afiliación*.

Por otro lado, la *Sala Superior*, a través de diversas sentencias²⁸ sostuvo que correspondía a los partidos políticos el probar que una persona expresó su voluntad de afiliarse, a través de la constancia de inscripción respectiva, es decir, el documento que contenía la expresión manifiesta de pertenecer a un partido político;

7

²⁶ Véase Tesis de Jurisprudencia 25/2002, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

²⁷ Consultable en: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002

²⁸ Véase SUP-RAP-1107/2017, SUP-RAP-614/2017 y SUP-RAP-139/2018

criterio que, a la postre, dio origen a la tesis de jurisprudencia 3/2019, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO.

Asimismo, la *LGPP* establece, entre otros supuestos, las obligaciones de los partidos políticos de registrar a su militancia; en efecto, en los artículos 29 y 30, de dicho ordenamiento, se prevé el deber de los institutos políticos de llevar a cabo este registro; así como del deber de garantizar la protección de los datos personales de sus agremiados.²⁹

En este tenor, el *INE* emitió los "Lineamientos para la verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales para la conservación de su registro y su publicidad, así como para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales en posesión del Instituto Nacional Electoral". ³⁰

En tal documento se estableció el deber de los institutos políticos nacionales de capturar de manera permanente los registros de sus militantes en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados, además de que la información ahí reportada debería coincidir con la solicitud de afiliación; debiéndose asentar datos como nombre de la persona, clave de elector, sexo, la entidad y la fecha de registro.³¹

Posteriormente el *INE* emitió el acuerdo INE/CG33/2019, en el que, de manera excepcional, permitió que los partidos políticos realizaran una depuración de sus padrones de militantes, implementándose el "procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados a los Partidos Políticos Nacionales", a través del cual los partidos políticos estaban obligados a revisar y depurar su padrón de militantes, al verificar que contaran con las cédulas de afiliación o, en su caso, debían darlos de baja del registro.³²

Sobre esto último, debe señalarse que, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG33/2019, el plazo para llevar al cabo las actividades del procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los partidos políticos nacionales, sería el comprendido entre el uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte.

²⁹ Véase numeral 28 (visible en la página 9) de la sentencia dictada por la *Sala Superior* en el expediente SUP-RAP-264/2022, consultable en: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2022/RAP/264/SUP 2022 RAP 264-1175193.pdf

³⁰ Ibid. numeral 29

³¹ Ibid.

 $^{^{32}}$ Ibid. numerales 31 y 32

No obstante, **el procedimiento** de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los partidos políticos nacionales **fue dividido por etapas y fechas de inicio y fin**, conforme a lo siguiente:

	DAG ACTIVIDADES DESCRIVADES		FECHA		
ETAPAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	Inicio	Fin	
N.O.	Publicitar actualización de padrones	PPN	01/02/2019	31/01/2020	
AVISO DE ACTUALIZACIÓN	Publicar leyenda "EN REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN"	INE	01/02/2019	31/01/2020	
AVIS	Informe conclusión de etapa	INE	01/02/2020	28/02/2020	
ÓN	Baja definitiva de las personas que interpusieron queja por indebida afiliación previo a la aprobación del Acuerdo	PPN	01/02/2019	31/03/2019	
REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN	Baja definitiva de registros por indebida afiliación presentada posterior a la aprobación del Acuerdo	PPN	10 días hábiles		
DOCE	Identificación de registros con documentación soporte de afiliación	PPN	01/02/2019	31/07/2019	
N DE	Publicación de los registros en reserva	PPN	01/02/2019	31/07/2019	
VISIĆ	Notificación al INE de registros en reserva	PPN	5 días hábiles de cada mes Mar-Ago		
A E	Actualizar padrones de los PPN con registros en IN reserva		5 días hábiles poste	rior a la notificación	
	Informe conclusión de etapa	INE	01/08/2019	31/08/2019	
ACIÓN	Aprobar mecanismos para ratificación y refrendo de militancia, en caso de haberlo	PPN	01/02/2019	31/12/2019	
RATIFICACIÓN	Informar a la militancia proceso de ratificación y refrendo	PPN	01/02/2019	31/12/2019	
L.	Recabar documentación que acredite la afiliación	PPN	01/02/2019	31/12/2019	

ETABAC	ACTIVIDADEO DECRONOADI E	FECHA		
ETAPAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	Inicio	Fin
	Informar registros que ratificaron o refrendaron su militancia	PPN	01/03/2019	31/12/2019
	Actualizar padrones de los PPN en función de los registros refrendados	INE	01/03/2019	31/12/2019
	Cancelar registros en reserva de los que no se obtenga documentación soporte	PPN	01/03/2019	31/12/2019
	Informe conclusión de etapa	INE	02/01/2020	31/01/2020
z	Ajustes finales al padrón de afiliadas y afiliados	PPN	02/01/2020	31/01/2020
CONSOLIDACIÓN	Informar respecto de la cancelación de registros en reserva de los que no se obtuvo documentación soporte de afiliación	PPN	09/01/2020	31/01/2020
CON	Apercibir respecto de los registros en reserva	INE	31/01/2020	31/01/2020
	Informe final	INE	01/02/2020	29/02/2020

De lo anterior y conforme a lo establecido en el acuerdo **INE/CG33/2019**, se obtiene el procedimiento siguiente:

- 1. REVISIÓN. Del uno de febrero al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve los partidos políticos llevaron a cabo la revisión de la documentación soporte de la totalidad de las y los afiliados a estos.³³
- 2. RESERVA. Del uno de febrero al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, los partidos debían reservar los registros como militantes, de aquellas personas respecto de las cuales no tuvieran cédula de afiliación o documento que acredite la voluntad, aun cuando no se hubieren presentado quejas por indebida afiliación.³⁴

³³ Considerando 12, numeral 2, con relación al numeral 2.2, del acuerdo INE/CG33/2019.

³⁴ Considerando 12, **numeral 2**, con relación al **numeral 2.2**, inciso **b)**, del acuerdo INE/CG33/2019.

Esto es, el **treinta y uno de julio de dos mil diecinueve** venció el plazo para que los partidos reservaran los registros de afiliación con los que <u>a esa fecha</u> contaban.

3. RATIFICACIÓN. A más tardar al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, los partidos políticos realizaron el procedimiento de ratificación o refrendo de la militancia, respecto de todos aquellos registros clasificados como reservados dado que no contaban con cédula de afiliación.³⁵

Esto es, si bien a más tardar al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, los partidos políticos podían recabar una cédula de afiliación que acreditara la debida afiliación de sus militantes, lo cierto es que dicho plazo solo resultó aplicable para aquellos registros reservados al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.

Conforme a lo anterior, se obtiene la premisa siguiente:

4. REGISTROS POSTERIORES AL 31 DE JULIO DE 2019. Al tratarse de registros que al treinta y uno de julio de dos mil veintidós, no se encontraban en los padrones de los partidos políticos, estos no fueron reservados, por tanto, se trata de registros nuevos³⁶ que, para llevarlos a cabo, debieron contar a esa fecha con la respectiva cédula de afiliación.³⁷

_

³⁵ Considerando 12, **numeral 2**, con relación al **numeral 3**, del acuerdo INE/CG33/2019.

³⁶ Considerando **13** del acuerdo INE/CG33/2019: **13**. <u>Las nuevas afiliaciones</u> de las y los militantes de los PPN, así como los refrendos o ratificaciones deberán incluir elementos mínimos, a fin de que puedan demostrar fehacientemente la debida afiliación de la ciudadanía, a saber: nombre completo, clave de elector, <u>fecha de afiliación</u>, domicilio completo y la manifestación expresa de querer afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un PPN, además deberán contener los requisitos que establezca la normatividad interna de cada PPN. Adicionalmente, el INE desarrollará una aplicación móvil que permita a los partidos políticos obtener nuevas afiliaciones, ratificaciones o refrendos, de su militancia. Lo anterior, automatizará el procedimiento de afiliación, ratificación o refrendo, además de que el INE resguardará un archivo digital de ello en un expediente electrónico; sin que esto exima al PPN de la obligación de conservar el documento (físico o digital) que acredite la debida afiliación, refrendo o ratificación en virtud de que los PPN son los sujetos obligados del cuidado y manejo de los datos que obran en sus padrones de afiliadas y afiliados. (...)

³⁷ Considerando 12, **numeral 3**, con relación al **numeral 3**, del acuerdo INE/CG33/2019: **De obtener la manifestación de voluntad de la persona ciudadana** en el sentido de que sí estaba afiliada al partido político y ésta se manifieste por escrito o a través de la aplicación móvil, entonces **deberá proceder la ratificación de la militancia con la fecha de afiliación asentada en el padrón — verificado por el Instituto en 2017** y actualizado de forma permanente por los partidos políticos—publicado en la página del INE con corte a la fecha de aprobación de este Acuerdo.

Lo anterior, puede ilustrarse en la siguiente línea de tiempo:

LÍNEA DE TIEMPO PARA LA OBTENCIÓN DE FORMATO DE AFILIACIÓN



Consideraciones similares sostuvo este Consejo General en la resolución INE/CG470/2022, que resolvió el procedimiento sancionador ordinario UT/SCG/Q/IPP/JD11/MICH/42/2021, la cual fue confirmada por Sala Superior mediante sentencia dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, al resolver el SUP-RAP-264/2022.

Además, en el caso, los Estatutos del PVEM, en sus artículos 2, 99 y 100, establecen los requisitos para ser afiliados a dicho partido, entre los cuales destacan que *La afiliación y la adhesión son individuales, libres, pacíficas y voluntarias*.

En suma, de las normas antes referidas se obtiene, medularmente, lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de las y los ciudadanos mexicanos para decidir libre e individualmente si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Al PVEM podrán afiliarse las y los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.
- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser mexicano y expresar su voluntad de manera individual, personal, libre, pacífica y voluntaria; solicitar ser dados de alta como militantes.

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.
- Los partidos políticos deberían cancelar aquellos registros de las personas de las que no contaran con la cédula de afiliación.

B) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-141/2018, en el que determinó, entre otras cuestiones si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer

3. Hechos acreditados

Como se ha mencionado, Briza Arlene Trejo Ríos denunció la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al haber sido incorporada al padrón del PVEM

sin su consentimiento, así como la presunta utilización indebida de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal afiliación.

Establecido lo anterior, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la materia de controversia, en el siguiente cuadro se resumirá, la información derivada de la investigación implementada, así como las conclusiones que, para el caso, fueron advertidas:

	Fechade		Manifestaciones del partido		
Persona quejosa	Fecha de la queja	afiliación informada por la DEPPP ³⁸	Afiliación	prueba	
Briza Arlene Trejo Ríos	09/03/2021	10/10/2019	La quejosa fue afiliada de manera libre y voluntaria al padrón de militantes del PVEM, tal como se acredita con el formato llenado por la Briza Arlene Trejo Ríos	No ofreció medio de prueba	

Debe precisarse que los informes y constancia aportados por la *DEPPP*, al ser documentos generados por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del citado Reglamento, tienen valor probatorio pleno, al no encontrarse controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

De acuerdo con la información plasmada, obtenemos las **conclusiones generales** siguientes:

- 1. No existe controversia en el sentido que Briza Arlene Trejo Ríos fue registrada como militante del PVEM.
- 2. La fecha de afiliación de la denunciante a PVEM, fue informada por la *DEPPP*, la cual es congruente con los datos que constan en el Sistema de

³⁸ Visible a página 67 del expediente.

Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, que fue capturada por el partido político denunciado.

3. El PVEM no aportó medio de prueba alguno para demostrar la libre afiliación de Briza Arlene Trejo Ríos.

No pasa desapercibido que el PVEM señaló que la quejosa fue afilada de manera libre y voluntaria, además de que lleno el formato de afiliación respectivo, sin embargo, no aportó medio de prueba alguno para justificar su dicho.

Así, en el siguiente apartado se estudiará los medios de prueba que obran en los autos para determinar si para la inclusión de la inconforme en el padrón de militantes del PVEM medió o no su consentimiento y, por ende, si el uso de sus datos personales para tal fin fue conforme a derecho, dado que es la materia de fondo del presente asunto.

4. Caso Concreto

En el presente asunto la inconforme adujo en su ocurso haber sido incorporada al padrón de militantes del PVEM sin que mediara su consentimiento, además de que dicho instituto político presuntamente hizo uso de sus datos personales para conseguir el objetivo mencionado.

Por su parte, el instituto político denunciado expuso que afilió libre y voluntariamente a Briza Arlene Trejo Ríos, llenando el formato respectivo para ello, sin embargo, no aportó medio de prueba alguno para demostrar su aserto.

En torno a ello, de conformidad con lo expuesto en párrafos anteriores, es válido concluir que —conforme a la normativa vigente— cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del PVEM, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, además de haber acreditado la realización de las actividades de capacitación previstas por los órganos directivos del instituto político, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

Al respecto, es preciso destacar que los partidos políticos —el PVEM en el caso particular— tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos y documentación en la cual conste que sus afiliadas y afiliados acudieron a solicitar su incorporación como militantes de manera libre y

voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Lo anterior es así, porque los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven como vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder; y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están obligados a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, **recabar, conservar y resguardar** los elementos y documentación donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho en caso de controversia y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario, lo que no sucedió en el presente asunto.

En este sentido, resulta válido concluir que la infracción atribuida al PVEM quedó debidamente demostrada porque no aportó, en las distintas oportunidades procesales para ello, medio de prueba alguno para demostrar la libre y voluntaria incorporación de Briza Arlene Trejo Ríos a su padrón de militantes a pesar de tener la carga de la prueba de demostrar su legal incorporación.

Al respecto, este Consejo General tiene presente que el partido denunciado opuso las excepciones y defensas siguientes:

- 1. Que Briza Arlene Trejo Ríos fue libre y voluntariamente afiliada al PVEM.
- 2. Que el uso de los datos personales de la quejosa fue consentido.
- 3. Que derivado de lo anterior no existe infracción alguna.

En torno a ello, este Consejo General considera que las excepciones y defensas opuestas por el denunciado para justificar la licita incorporación de la inconforme a su padrón de militantes resultan infundadas para exculpar al PVEM de la responsabilidad por la infracción que se le atribuye, fundamentalmente porque no se encuentra robustecido con medio de prueba alguno.

Falta de prueba de las excepciones opuestas por el PVEM.

En torno a este tema, es importante señalar que, en términos de lo previsto en el artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, de aplicación supletoria al presente

asunto, en relación con el artículo 441 de la LGIPE, es al que afirma un hecho a quien corresponde probar tal circunstancia, no así al que niega, a menos que su negación lleve implícita la afirmación expresa de un hecho.

En este sentido, cabe recordar que la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-107/2017**³⁹, estableció que la presunción de inocencia debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro *PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES*, ⁴⁰ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria ⁴¹ y como estándar probatorio. ⁴²

En el primer aspecto — regla probatoria— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz — estándar probatorio — es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Así, en el caso concreto, cuando en la denuncia que dio lugar un procedimiento sancionador que nos ocupa, Briza Arlene Trejo Ríos alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la citada inconforme no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad o la inexistencia de una documental), pues en términos de carga de la prueba, **no son objeto de demostración los hechos negativos**, sino conduce a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

40. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

³⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

⁴¹ Tesis de Jurisprudencia: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10ª Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093. 42 Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la veracidad de sus afirmaciones, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido político—tal como este lo afirmó— fue voluntaria, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

En torno a ello, es importante no perder de vista que la jurisdicción ha sostenido que si bien la cédula de afiliación es el medio de prueba idóneo para demostrar la afiliación voluntaria, resulta viable probar la afiliación voluntaria a través de otros medios de prueba, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas o la participación del quejoso en actos partidistas, como la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones del instituto político.

Esto es, la presunción de inocencia **no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna**, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora.

En este sentido, cabe señalar que las posturas de las partes en el presente asunto pueden resumirse en que, mientras la quejosa **negó** haber otorgado su consentimiento para ser militante del PVEM, éste **afirmó** que dicha militancia estuvo precedida de manera libre y voluntaria.

Conforme a lo anterior, estando acreditado en autos que la denunciante fue inscrita entre las personas afiliadas de PVEM, correspondía al instituto político demostrar que recabó el consentimiento de la quejosa para ser incorporada a su padrón de afiliados.

En este sentido, debe destacarse que aun cuando el justiciable señaló que recabo el formato en el cual la quejosa manifestó libremente su voluntad, lo cierto es que, no aportó ningún medio de convicción para demostrar su dicho.

En suma, toda vez que la persona denunciante manifestó no haber otorgado su consentimiento para afiliarse al PVEM; que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral competente; y que el denunciado no cumplió con su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente, esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de la quejosa y

que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, el mencionado partido político **utilizó sin su autorización sus datos personales,** lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que proceda.

TERCERO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Demostrada plenamente la existencia de la falta denunciada, así como la responsabilidad del PVEM, procede ahora determinar la sanción que corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, relativo a que los elementos que se deben tomar en cuenta entre los que se encuentran la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
La infracción se cometió	El partido Verde Ecologista de	Artículos 6, apartado A,
por una acción del	México cometió la infracción al	fracción II; 16, párrafo
partido político	incorporar a su padrón de afiliados a	segundo; 35, fracción III, y 41,
denunciado, que	Briza Arlene Trejo Ríos, sin haber Base I, párrafo segundo	
transgrede	recabado su consentimiento, de	Constitución; 443, párrafo 1,
disposiciones de la	manera que transgredió su derecho	inciso a), de la LGIPE; 2,
Constitución, y la	de libre afiliación, usando para el	párrafo 1, inciso b) y 25,
LGIPE, en el momento	efecto mencionado los datos	párrafo 1, incisos a), e) y u) de
de su comisión.	personales de la quejosa.	la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de las personas ciudadanas, de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Así, se acreditó que el PVEM **incluyó indebidamente** en su padrón de afiliados a la quejosa, sin demostrar que, para incorporarla, medió la voluntad de ésta de inscribirse a dicho padrón, vulnerando con ello lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

En el caso a estudio **existe singularidad de la falta,** dado que, aun cuando se acreditó que el *PVEM* afilió a la denunciante sin que hubiera expresado su consentimiento; y que, para ello, usó sin autorización sus datos personales, lo cierto es que no existe una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, pues la segunda circunstancia mencionada es una condición para la comisión de la infracción, misma que consiste en incluir en su padrón de militantes a una persona, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse juntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo. La falta que se analiza la cometió el PVEM cuando incorporó a su padrón de afiliados a Briza Arlene Trejo Ríos sin contar con su consentimiento y haciendo uso indebido de sus datos personales, lo cual es contrario a lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*.
- **b) Tiempo.** La afiliación irregular aconteció el diez de octubre de dos mil diecinueve, de conformidad con la información proporcionada por la *DEPPP*.
- c) Lugar. La infracción se cometió en el estado de Coahuila

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del PVEM, en vulneración a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El PVEM es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El partido denunciado está sujeto al cumplimiento de las normas que integran
 el orden jurídico nacional e internacional, así como sus normas internas y
 está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar
 su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de
 las y los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25, párrafo 1, incisos a), de la
 LGPP.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadana y ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, se ensancha y amplía.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.

- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un deber positivo a cargo de los institutos políticos, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en recabar, conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 3, párrafo 2, y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la LGPP.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- **1.** La quejosa adujo que no solicitó en momento alguno su registro o incorporación como militante del PVEM.
- **2.** Quedó acreditado que la quejosa fue incluida en el padrón de militantes del PVEM, conforme a lo informado por la *DEPPP*.

- **3.** El partido político denunciado no demostró que la afiliación de la inconforme se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios descritos en la presente resolución, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de ésta.
- **4.** El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación de la quejosa fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun de manera indiciaria, para estimar que su afiliación fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta pertinente precisar que la conducta desplegada por el PVEM se cometió al afiliar indebidamente a la quejosa, sin demostrar que ésta expresó su voluntad para ser incorporada en el padrón de militantes del denunciado, así como para usar sus datos personales con esa finalidad.

Lo anterior, pues —se insiste—, la cuestión a dilucidar consiste en determinar si la quejosa otorgó o no su consentimiento expreso para ser afiliada, de modo que, si el partido político infractor no allegó al sumario la cédula de afiliación de Briza Arlene Trejo Ríos, entonces, al incumplir con la carga probatoria impuesta, la citada afiliación debe considerarse ilegal porque no existe medio de prueba alguno que demuestre lo contrario, ni siguiera en grado indiciario.

2. Individualización de la sanción.

Una vez asentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

De conformidad con el artículo 458, párrafo 6, de la *LGIPE*, se considera reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable de la comisión de una falta, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior, a través de la Jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA

SU ACTUALIZACIÓN,⁴³ ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

- **1.** El ejercicio o período en el que se cometió la transgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción;
- 2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y
- **3.** Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme.

Ahora bien, resulta un hecho notorio para este Consejo General la resolución identificada con la clave INE/CG446/2018⁴⁴, correspondiente al Procedimiento Sancionador Ordinario con clave UT/SCG/Q/RGG/CG/66/2017, emitida el once de mayo de dos mil dieciocho, misma que fue impugnada en el expediente SUP-RAP-137/2018 y confirmada mediante resolución de seis de junio de dos mil dieciocho, en la que el PVEM, fue sancionado por una conducta similar a la que aquí nos ocupa, de modo, que si la afiliación de Briza Arlene Trejo Ríos ocurrió el diez de octubre de dos mil diecinueve, esto es, con posterioridad a la resolución que determinó la responsabilidad administrativa del PVEM por hechos de igual naturaleza a los aquí analizados, entonces, es claro que **se actualiza la reincidencia** por que aun conociendo la prohibición de afiliar a una persona sin su consentimiento, integró a su padrón de militantes a la citada quejosa, sin el menor respeto a la norma, lo cual exige un mayor reproche por la indiferencia del justiciable al respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos.

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse como de una **gravedad ordinaria**, tomando en cuenta las circunstancias siguientes:

 Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de la quejosa, pues el PVEM no demostró con documentación alguna que mediara su voluntad de pertenecer a dicho instituto político.

⁴³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010

⁴⁴ Consultable en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96007/CGex201805-11-rp-1-5.pdf

- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es el derecho de las y los ciudadanos de afiliarse libremente a los partidos políticos, desafiliarse de ellos o no pertenecer a ninguno;
- Los partidos políticos, —en el caso, el PVEM— tienen la obligación de velar por el debido respeto del referido derecho fundamental, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen afiliarse a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de la persona quejosa, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para ser incorporada al padrón de afiliados del PVEM.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- Existe reincidencia por parte del PVEM.

Por lo anterior, como antes quedó dicho, se considera procedente calificar la falta en que incurrió el PVEM como de **gravedad ordinaria**.

C) Sanción a imponer

En la mecánica para la individualización de la sanción, se debe partir de la premisa que, con la acreditación de la infracción, se debe imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción y, hecho lo anterior, ponderando las circunstancias particulares del caso, determinar si es conducente transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares, que pudieran afectar el valor protegido por la norma transgredida.

Así, el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, prevé el catálogo de sanciones a imponer a los partidos políticos, mismas que pueden consistir en amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México (ahora calculado en UMAS); reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral y, en casos de graves y reiteradas conductas violatorias a la *Constitución* y la *LGIPE*, la cancelación de su registro como partido político.

Ahora bien, es preciso no perder de vista que el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE* establece que, para la individualización de las sanciones, esta autoridad electoral nacional deberá tomar en cuenta, *entre otras* cuestiones, la gravedad de la conducta; la necesidad de suprimir prácticas que afecten el bien jurídico tutelado por la norma transgredida, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; la reincidencia en que, en su caso, haya incurrido el infractor; y, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio involucrado en la conducta, en caso que esta sea de contenido patrimonial.

Así, la interpretación gramatical, sistemática y funcional de este precepto, a la luz también de lo establecido en el artículo 22 de la *Constitución*, el cual previene que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, así como del criterio sostenido por la Sala Superior a través de la Tesis XLV/2002, de rubro *DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL*, conduce a estimar que si bien este *Consejo General* no puede soslayar el análisis de los elementos precisados en el párrafo que antecede, éstos no son los únicos parámetros que pueden formar su convicción en torno al *quántum* de la sanción que corresponda a una infracción e infractor en particular.

En efecto, reconociendo el derecho fundamental de acceso a una justicia completa a que se refiere el artículo 17 de la Ley Suprema, este *Consejo General*, como órgano encargado de imponer sanciones (equivalentes a la *pena* a que se refiere el artículo 22 constitucional, entendida como expresión del *ius puniendi* que asiste al estado) **está compelido a ponderar, casuísticamente, todas las circunstancias relevantes que converjan en un caso determinado**, partiendo del mínimo establecido en el artículo 458 de la *LGIPE*, que como antes quedó dicho, constituye la base insoslayable para individualizar una sanción.

Lo anterior es relevante porque si bien es cierto la finalidad inmediata de la sanción es la de reprochar su conducta ilegal a un sujeto de derecho, para que tanto éste como los demás que pudieran cometer dicha irregularidad se abstengan de hacerlo, lo es también que la finalidad última de su imposición estriba en la prevalencia de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, para que, en un escenario ideal, el estado no necesite ejercer de nueva cuenta el derecho a sancionar que le asiste, pues el bien jurídico tutelado por cada precepto que lo integra, permanecería intocado.

En ese tenor, este *Consejo General* ha estimado en diversas ocasiones que por la infracción al derecho de libertad de afiliación como el que ha quedado demostrado a cargo del PVEM, justifican la imposición de una **MULTA**.

Lo anterior, obedece justamente a la vigencia del orden jurídico, incluso más allá de la imposición de sanciones que reprochen a los partidos políticos la violación al derecho fundamental de la ciudadanía a decidir si desean o no militar en una fuerza política, además de fortalecer al sistema de partidos, el cual se erige indispensable y necesario para el desarrollo del régimen democrático de nuestro país, permitiendo que los institutos políticos cuenten con un padrón de militantes depurado, confiable y debidamente soportado, en cumplimiento al principio de certeza electoral.

Por otra parte, no pasa inadvertido que el denunciado dio de baja de su padrón de militantes a la quejosa, sin embargo, este *Consejo General* considera que tal comportamiento no puede liberar al PVEM de la responsabilidad en que incurrió, y por el contrario, su actitud descuidada, al no haber procesado dicha cancelación dentro de los plazos previstos en el acuerdo INE/CG33/2019, cuya finalidad toral era, como antes fue dicho, depurar los padrones de afiliados de los partidos políticos, para que solo figurasen aquellas personas de quienes había constancia documental prestaron su consentimiento para ser incorporados, redunda en la transgresión del orden jurídico, vulnera el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos, incluso, por parte de las propias entidades de interés público, como lo es el sujeto denunciado y la prevalencia del Estado de Derecho.

Lo anterior se considera así, ya que, como se indicó, la baja de la inconforme del padrón de afiliados al PVEM ocurrió el **treinta de agosto de dos mil veintidós**, es decir, de manera **posterior** a la conclusión del **plazo previsto en el acuerdo INE/CG33/2019**, para desarrollar un procedimiento de depuración de sus padrones de militantes.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 21 Constitucional, que prevé que la imposición de las penas, su modificación y su duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial (entendida formal o materialmente), a juicio de este órgano electoral derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción, se justifica la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían excesivas, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, en específico que se trata de la afiliación indebida de una ciudadana, que tal conducta se consideró de carácter doloso, que fue considerada de gravedad ordinaria, que la quejosa fue dada de baja con posterioridad al treinta y uno de enero de dos mil veinte, así como las condiciones socio-económicas de infractor y de manera particular la **reincidencia** en que el justiciable incurrió, esta autoridad considera proporcional, en el caso concreto, imponer al PVEM una multa equivalente a 1,284 (mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, vigente en el año de la conducta, en que se acreditó la reincidencia.

Sanción que también ha sido impuesta por este *Consejo General*, en los casos de reincidencia, como lo fue la identificada con las claves **INE/CG168/2021** e **INE/CG1675/2021**.

Así, a juicio de este Consejo General, por las razones hasta aquí expuestas, se considera que la multa impuesta al PVEM constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, sobre todo como en el caso que nos ocupa, aquellas relacionadas con nuevos registros de militantes, que no cuenten con el respaldo que acredite la libre afiliación de las y los ciudadanos que figuran en el padrón de afiliados de un partido político.

Lo anterior, conforme a lo que se señala a continuación:

N°	Afiliación indebida	UMA's de multa	Fecha de afiliación	Valor UMA ⁴⁵	Sanción por imponer
1	Briza Arlene Trejo Ríos	1,284	10/10/2019	\$ 84.49	\$108, 485.16
Suma de multa					\$ 108, 485.16

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al *PVEM* constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que aun cuando la infracción cometida por el PVEM causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no condujo a que el instituto político obtuviera algún monto como beneficio o lucro, ni que el quejoso sufriera un daño o perjuicio económico ocasionado por la infracción.

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que, según lo informado por la *DEPPP*, a través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/02452/2023, el monto de la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de dos mil veintitrés debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir por el PVEM sería la siguiente:

. .

⁴⁵ Consultable en: https://www.inegi.org.mx/temas/uma/

SUJETO	Financiamiento mensual ordinario (A)	Deducción por multas y sanciones (B)	Importe neto de la ministración (A-B)
PVEM	\$ 42,296,137.00	\$ 957,869.49	\$ 41,338,267.51

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al PVEM no es gravosa ni excesiva, en virtud de que su cuantía líquida (\$48,263,200.84), respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de septiembre del año en curso, representa el 0.26 % (cero punto veintiséis por ciento) del total de la ministración mensual correspondiente a la fecha referida.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, sin resultar excesiva ni ruinosa, ni afecta las operaciones ordinarias del partido, además de ser proporcional a la falta cometida y generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009⁴⁶, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la *LGIPE*, las cantidades objeto de las multas serán deducidas por este Instituto de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba *el PVEM*, una vez que esta resolución haya quedado firme.

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,⁴⁷ se precisa que la presente determinación es

_

⁴⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm

⁴⁷ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL", y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de

impugnable a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Es existente la infracción atribuida al PVEM, consistente en la indebida afiliación de Briza Arlene Trejo Ríos, haciendo uso para tal efecto de los datos personales de la quejosa, en términos de lo establecido en el Considerando **SEGUNDO** de esta resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando **TERCERO**, de la presente resolución, se impone al PVEM, **una multa** consistente en 1,284 (mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, conforme a su valor en el año en curso, equivalente a \$ 108, 485.16 (ciento ocho mil, cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100 M.N.).

TERCERO. La presente resolución es impugnable a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político—electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

CUARTO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta al PVEM será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme.

31

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL."

NOTIFÍQUESE, personalmente a las y los quejosos del presente procedimiento; en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral al Partido Verde Ecologista de México, por conducto de su representante ante este Consejo General de este Instituto; y por estrados, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 26 de octubre de 2023, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Maestro Arturo Castillo Loza, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Maestra Rita Bell López Vences, Maestro Jorge Montaño Ventura, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y de la Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona.

LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL

LA ENCARGADA DEL DESPACHO
DE LA SECRETARÍA
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA LIC. MARÍA ELENA CORNEJO ESPARZA